

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

Medellín, diecisiete (17) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez, quien ahora actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede dentro del proceso ordinario con radicado número 05001310501220130080301 promovido por **GERMÁN DE JESÚS CUERVO RUIZ** contra **COLFONDOS PENSIONES Y CESANTÍAS** y donde se integró en calidad de Litis consorte necesaria por pasiva a la joven **BIBIANA ANDREA EUSSE CASTRILLÓN**, con el fin de conocer en el grado jurisdiccional de Consulta, conforme el artículo 69 del CST y SS, de la sentencia proferida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...” se toma la decisión correspondiente mediante

providencia escrita número **266**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

Mediante acción judicial, el señor Germán de Jesús Cuervo Ruíz, petitionó el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente por la muerte de su compañera permanente, con las mesadas pensionales adeudadas y los intereses del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Como fundamento fáctico de lo pretendido, indicó que, la señora Aminta Castrillón Gómez era pensionada por invalidez desde el 22 de abril del año 2004, y falleció el 22 de abril del año 2004. Argumentó que convivió con ésta desde el 20 de septiembre de 1988 y hasta su muerte, unión de la cual, no procrearon hijos. En atención a ello, se presentó a reclamar la pensión de sobreviviente sin que hubiera habido respuesta alguna.

Admitida la demanda, la accionada Colfondos SA, narró que, en efecto, la señora Aminta de Jesús Gómez se encontraba pensionada por invalidez, desde el 22 de abril de 2004, empero, no le consta los hechos relativos a la convivencia descritos por la demandante. Indicó que el actor presentó solicitud pensional incompleta siendo imposible resolver la solicitud planteada. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones e interpuso las excepciones de *“Inexistencia de la obligación de reconocer y pagar la pensión de sobreviviente solicitada”, “Falta de causa para demandar”, “Inexistencia de la mora y buena fe de la entidad”, “Prescripción”, “Compensación”, “Inexistencia de la obligación de pagar intereses”, “No cumplimiento de los requisitos exigidos por ley para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes”*.

Llamó en garantía a Aseguradora de Seguros de Vida Colpatria SA, en atención a la suscripción de la póliza N 006 de 1 de enero de 2001, vigente hasta el 31 de diciembre de dicha fecha.

En respuesta al llamamiento, Seguros de Vida Colpatria S.A., contestó que en efecto la señora Aminta de Jesús se encontraba pensionada por invalidez desde el 22 de abril de 2004, no le consta la convivencia allí narrada y se opuso a la prosperidad de las pretensiones invocadas en el escrito de demanda, interponiendo los medios exceptivos de: “*Inexistencia de la obligación*”, “*Improcedencia de intereses moratorios*”, “*Prescripción*”, “*Genérica*”, “*Cumplimiento contractual*”, “*Ausencia de cobertura de la póliza por no cumplimiento de requisitos del demandante*”, “*Improcedencia de pretensión de condena en costas en contra de Seguros de Vida Colpatria SA*”

Igualmente, mediante auto, se ordenó integrar el litisconsorcio necesario por pasiva con la joven Bibiana Andrea Eusse Castrillón, hija de la causante, quien fue notificada mediante curador ad –litem conforme al artículo 29 del CP T y SS, el cual, contestó que no le constan los hechos narrados en el libelo gestor, sin pronunciamiento sobre las pretensiones elevadas.

Mediante sentencia del veintitrés (23) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, declaró probada la excepción de “inexistencia de la obligación”, interpuesta por la accionada y absolvió a las pasivas de las pretensiones invocadas en su contra, ante la ausencia de material probatorio que dejara ver la convivencia de la pareja.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Corrido traslado para alegar, las partes no hicieron pronunciamiento alguno.

PROBLEMA JURÍDICO

De acuerdo al grado jurisdiccional de consulta, consiste en determinar si le asiste al señor Germán de Jesús Cuervo Ruiz la calidad de beneficiario de la pensión de sobreviviente causada por la muerte de su compañera permanente, si hay lugar o no a retroactivo pensional e intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

CONSIDERACIONES

El sistema de Seguridad social integral, con el fin de amparar la contingencia denominada “muerte” y salvaguardar así el grupo familiar de la persona que fallece y percibía en el ahora finado parte coadyuvante de los ingresos familiares, reglamentó el reconocimiento de la que denominó “pensión de sobreviviente”.

Para la verificación de tal derecho, es imperativo determinar la fecha del fallecimiento del afiliado o pensionado, pues la norma vigente para la época del hecho funesto es la que, debe aplicarse al momento de dar estudio a la procedencia o no de la prestación.

Reposa en la foliatura, aportado por la parte actora, registro civil de defunción que da cuenta de la muerte de la señora Aminta Castrillón Gómez el 22 de abril de 2009, momento, para el cual, se encontraba en vigencia la Ley 797 de 2003 modificatoria de la Ley 100 de 1993 y sobre el tema indicó:

Artículo 46. Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:

1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca y,

....

Respecto a la calidad de beneficiarios de la prestación, para la época de la muerte se encontraba vigente:

“ARTÍCULO 13. Los artículos 47 y 74 quedarán así:

“Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o

más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.

En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal, pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente;

c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de **estudiantes y cumplan con el mínimo de condiciones académicas que establezca el Gobierno;** y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las

condiciones de invalidez. Para determinar cuándo hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993;

*d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente **de forma total y absoluta** de este;*

e) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente de éste.

PARÁGRAFO. *Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre, el hijo o el hermano inválido sea el establecido en el Código Civil.”*

Es importante precisar, que este articulado ha sido objeto de numerosas explicaciones sobre el alcance de lo que el legislador ambicionó proteger, bien por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia como por la Corte Constitucional.

En sentencia SL 1399 del 25 de abril de 2018, la Honorable Sala Laboral unificó sus sub reglas respecto del alcance hermenéutico del artículo, sobre los requisitos que debe cumplir el cónyuge o compañero permanente, para ser considerado beneficiario de la pensión de sobrevivientes. La importancia de la sentencia radica, en que estimó que el elemento que da vida al derecho es la convivencia, que inexorablemente debe ser de 5 años, como mínimo, sin hacer distinción sobre la calidad del causante, bien pensionado como afiliado, y delimitó la noción de convivencia así:

“Comunidad de vida, forjada en el crisol del amor responsable, la ayuda mutua, el afecto entrañable, el apoyo económico, la asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual, que refleje el propósito de realizar un proyecto de vida de pareja responsable y estable, a la par de una convivencia real efectiva y afectiva, durante los años anteriores al fallecimiento del afiliado o del pensionado”.

En sentencia SL 1730 de 2020, la Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia indicó que el requisito mínimo de convivencia de cinco (5) años, debía entenderse exigible solamente en el caso de la muerte de pensionado, pues la norma, no traía ese requisito para el caso del afiliado. Sin embargo, la Corte Constitucional como máximo órgano de interpretación a la luz de la constitución, en sentencia SU 149 de 2021 indicó que en la sentencia SL 1730 de 2020 la Corte Suprema de Justicia desconoció el principio de igualdad y de sostenibilidad financiera del sistema pensional, así como el precedente judicial aplicable que no era otro que lo establecido en **Sentencia SU-428 de 2016, para lo cual debió cumplir con cargas argumentativas que brillaron por su ausencia**, al no exponer las razones por las cuales su postura divergente garantizaba de mejor modo los principios y valores constitucionales involucrados, pues desde la sentencia C-336 de 2014 la Corte Constitucional fue clara en indicar la igualdad de requisitos respecto a pensionado y afiliado en cuanto a convivencia se refiere, siempre afirmando la necesidad de ser *“parte del grupo familiar de quien fallece”* para acceder a la prestación, bajo la luz del artículo 46 de la Ley 100 de 1993.

Así mismo en sentencia SU 108 de 2020 explicó los elementos probatorios que deben estar presentes cuando se estudia la convivencia, pues puede darse el caso, que los cónyuges o compañeros permanentes no puedan cohabitar el mismo lugar, sin que ello rompa la convivencia de la pareja, pues en cada caso habrá de estudiarse las condiciones que dieron origen al rompimiento material. Esta precisión, ha sido avalada por la Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia.

En cumplimiento a lo expuesto es claro, que el requisito predominante para adquirir el derecho a la pensión de sobreviviente a la Luz de la sentencia SU 149 de 2021, sigue siendo la convivencia, que en caso del afiliado y del pensionado deberá ser de cinco años, pues siendo un criterio de raigambre constitucional, su aplicación es obligatoria de cara a lo dispuesto en la Ley 270 de 1996.

Todo este razonamiento se da de cara al literal a) del artículo 47 de la Ley 797 de 2003.

En atención a que a la señora Aminta Castrillón Gómez le fue reconocida pensión de invalidez de origen común, que era cancelada desde el 21 de marzo del año 2003, fecha de estructuración del hecho invalidante, al tener tal calidad, la norma indicó expresamente y sin lugar interpretación alguna, que tendrían derecho a la prestación de sobrevivencia, aquel, compañero permanente supérstite, que estuviere haciendo vida marital con el causante **hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a hecho funesto.**

Alegando la calidad de compañero permanente, al señor Germán de Jesús Cuervo Ruiz, le impartía la carga procesal de probar a la judicatura:

- Convivencia efectiva con la pensionada.
- Que dicha convivencia fuera por lo menos de cinco años.
- Dichos cinco años fueran los anteriores al momento del deceso.

Procedió la Sala al estudio de los medios probatorios arrimados al proceso, iniciando con la documental de la que se constata lo siguiente:

La tesis del escrito de demanda, es la convivencia efectiva de la pareja por lo menos desde el 20 de septiembre del año 1988, pues así se lee del hecho primero del líbelo introductor.

Si bien en el registro civil de nacimiento de la señora Aminta Castrillón Gómez nacida el 11 de agosto de 1961, no reposa nota marginal alguna, aportado en el proceso se encuentra sentencia emitida por el Juzgado Cuarto de Familia de Medellín, del (5) cinco de junio del año mil novecientos noventa y ocho (1998), en donde se declara la cesación de efectos civiles del matrimonio católico, y la escritura pública AA 5416425 del veintiocho (28) de septiembre del año dos mil

uno (2001), mediante la cual se liquidó la sociedad conyugal existente entre Javier Orlando Eusse Madrid y Aminta Castrillón Gómez, por lo cual, es claro que hasta el mes de junio del año 1998 la pensionada tuvo una unión conyugal que feneció por el mutuo acuerdo de los contrayentes.

Allegado al plenario el Registro civil de nacimiento del demandante, señor Germán de Jesús Cuervo Ruiz el 13 de noviembre del año 1976, para la fecha en que se enuncia el inicio de la convivencia en el hecho primero de la demanda, es decir, para el 20 de septiembre del año 1988, el demandante **tendría 11 años de edad**, por lo cual, no es posible inferir la existencia de convivencia de pareja con la señora Aminta Castrillón Gómez con ese extremo de inicio, en atención a la ausencia de capacidad legal para ello.

Ahora, reposan en el proceso múltiples declaraciones extrajuicio:

- José Mauricio Restrepo Díaz, realizada el 7 de febrero del año 2013 ante la Notaría Única del Circulo de Sabaneta, quien indicó, haber conocido a la pareja, constarle de su convivencia durante once años ininterrumpidamente, con inicio el 20 de septiembre de 1998, que no tuvieron hijos y que el señor Cuervo Ruiz dependía económicamente de la pensionada.
- Luz María Arroyave Ruiz, indicó el 7 de febrero del año 2013 ante la Notaría Única del Circulo de Sabaneta, que, conoció a la pareja, constarle su convivencia desde el 20 de septiembre de 1998 hasta la muerte de la causante, que no se separaron y que no tuvieron hijos.
- Nohelia de Fátima García Restrepo enunció el 7 de febrero del año 2013, ante la notaría Única del Circulo de Bello, conocer a la pareja, quien convivió durante 11 años de manera ininterrumpida, desde el 20 de septiembre del año 1998, que el señor Cuervo Ruiz dependía económicamente de su compañera.

- Bibiana Andrea Euse Castrillón, el 4 de mayo del año 2009, ante la Notaría Veintinueve del Circulo de Bogotá, expresó que el señor Germán de Jesús Cuervo Ruiz, fue el compañero permanente de su madre, fallecida el 22 de abril de 2009, que ambos velaban por la educación de ella en los 11 años de convivencia que compartieron juntos, sin conocer a otra persona que hiciera las veces de compañero permanente en los últimos 8 años.

Sobre el valor probatorio de las declaraciones extra juicio, debe recordarse que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema ha precisado lo siguiente: (SL 3619 de 2022):

“las mismas deben ser asumidas por el juez como documentos declarativos emanados de terceros y, en esa medida, con arreglo a lo previsto por el artículo 174 del CGP, no requieren de ratificación, salvo que la parte contraria así lo solicite, tal como se indicó, entre otras providencias, en la CSJ SL, 6 mar. 2013, rad. 42536, CSJ SL16322-2014, SL1188-2015, SL1227-2015, SL3103-2015, SL5665-2015, SL14129-2015...

...

La Corte Constitucional en reiterados pronunciamientos, ha precisado que no en todos los casos en los que se discuta la posibilidad de valorar testimonios practicados de manera extrajudicial, pueden solucionarse con base en una interpretación literal de las normas procesales, por cuanto es posible que existan supuestos de hecho en los cuales la aplicación rígida de una formalidad ritual podría conducir a consecuencias que son contrarias a las finalidades perseguidas por el legislador, como lo es la garantía a los derechos sustanciales, para el presente caso la pensión de sobreviviente, que hace parte de un derecho a la seguridad social, el cual, propende por proteger el núcleo familiar que queda desamparado por la muerte de quien lo sostenía económicamente y, en particular, garantiza igualmente los derechos de defensa y contradicción (CC T-247/2016, CC T-964-2014)

Otorgando valor probatorio entonces a estas declaraciones como documentos provenientes de terceros, inicialmente se impartiría veracidad a sus dichos,

empero, llamó especial atención a la Sala, las declaraciones extra juicio aportadas realizadas por el aquí demandante y que indican lo siguiente:

- Para el 22 de febrero del año 2013 el señor German de Jesús Cuervo Ruiz, ante el Circulo Notarial de Sabaneta, indicó que: *“ESTUVE CONVIVIENDO BAJO EL MISMO TECHO Y EN FORMA PERMANENTE DURANTE ONCE (11) AÑOS, HASTA EL MOMENTO DE SU FALLECIMIENTO CON MI COMPAÑERA LA SEÑORA AMINTA CASTRILLÓN GÓMEZ, QUIEN EN VIDA SE IDENTIFICABA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 42.822.001 DE SABANETA ANTIOQUIA, QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2009. DECLARO BAJO JURAMENTO QUE NO TUVIMOS HIJOS EN COMÚN.... DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE NO CONOZCO A OTRAS PERSONAS CON IGUAL O MEJOR DERECHO A RECLAMAR LA PENSIÓN SUSTITUTIVA QUE YO SU COMPAÑERO PERMANENTE POR HABER COMPARTIDO LECHO, TECHO Y MESA POR MÁS DE ONCE (11) AÑOS HASTA SU MUERTE. “*
- El 28 de mayo del año 2003, ante el mismo Circulo Notarial, en demandante en conjunto con la señora Mirian del Carmen Moncada García, indicó: *“Conocemos desde hace más de cinco años en forma personal a la señora: AMINTA CASTRILLÓN GÓMEZ identificada con cedula de ciudadanía No 42.822.001 de Sabaneta. Y además nos consta que ella es separada hace diez años y en estos momentos no convive con nadie”.*

De acuerdo con la declaración extra juicio efectuada en el año 2013, y donde indicó que convivió por espacio de 11 años con la pensionada, habiendo ocurrido el fallecimiento el 22 de abril de 2009, la convivencia debía iniciar en el año 1998, empero, para el año 2003, el mismo señor Cuervo Ruiz, narró bajo la gravedad del juramento, que la señora Aminta Castrillón no convivía con nadie.

Esta contradicción, ofrece un ramillete de dudas a la judicatura, que sólo pueden aclararse con la ponderación de otros elementos de prueba, como lo es, la también declaración extra juicio de la señora Aminta de Jesús Castrillón Gómez ante el Círculo Notarial de Sabaneta, Notaría Única, el 29 de mayo de 2003, donde indicó que, convivía con su hija, y su estado civil, era “Divorciada” y cuando realizó la solicitud de pensión de invalidez, sólo enunció como beneficiaria a la joven Bibiana Eusse Castrillón, con quien vivía en la calle 73 sur número 46-43 apto 301 de Sabaneta.

En el dictamen de pérdida de capacidad labora efectuado el 8 de agosto del año 2003, la señora Aminta Castrillón expuso, ser separada.

Es por esto que las declaraciones extra juicio allegadas por José Mauricio Restrepo Díaz, Luz María Arroyave, Nohelia de Fátima García Restrepo se contradicen expresamente por lo dicho por el demandante.

El señor **German de Jesús Cuervo Ruiz** absolvió interrogatorio de parte, en la audiencia del artículo 80 del CPT Y SS, la cual, donde indicó:

Conoció a la señora Aminta porque eran vecinos en la Vereda San José de Sabaneta, ello fue en el año 1998 en una fiesta, para ese momento ella tenía unos 38 años más o menos, ella era ingeniera de Sistemas de EPM, y para ese momento sólo vivía con la hija y era separada legalmente. Bibiana tenía unos 13 años. No ve a la joven Bibiana hace dos años, y pregonó que debe tener unos 25 años, que estudia en Bélgica periodismo. Explicó que cuando conoció a la señora Aminta tenía unos 25 o 26 años, y trabajaba en la vereda en un estadero. Comentó que conoció a la pensionada en septiembre de 1998 y que ella le llevaba 15 años de edad. Al mes de conocerse se fueron a vivir juntos en la calle 77 sur número 46-43 piso 3 donde vivieron 9 años y de ahí se fueron a vivir a la vereda San José. Explicó que la pensionada murió un 22 de abril del año 2009 de un infarto. Adquirió la enfermedad antes de conocerlo, y para el año 1997 ya tenía marcapasos. Explicó que para la muerte de la señora Aminta, Bibiana era menor

de edad, pero viajaba mucho y se iba a pasear por mucho tiempo fuera del país. Expresó que cuando la conoció, ella ya llevaba 10 años separada. Indicó que la pensionada fue cremada.

Es importante en la cronología de los eventos dados por el señor Cuervo Ruiz, revisados a las luces del artículo 191 del CGP, debe extraerse situaciones importantes:

- De acuerdo al dictamen de pérdida de capacidad laboral realizado a la señora Aminta Castrillón, se extrae que el 26 de noviembre del año 1998 fue intervenida quirúrgicamente realizándose un implante cardio - desfibrilador, por lo cual, si conoció al demandante en septiembre de 1998 e iniciaron la convivencia días después, no es posible que éste indique que cuando la conoció ya tenía “marcapasos”, pues sólo para ese año, y posterior a la fecha en que el interrogado dice haber iniciado la convivencia, empeoró el estado de salud de la demandante y se hizo necesario el trasplante.
- Interrogado expresamente por el procurador judicial de la llamada en garantía sobre ambas declaraciones extra juicio que describen situaciones contradictorias, contestó: *“no me acuerdo bien”*, empero, reconoció su firma en la declaración del año 2003.
- Indicó que Bibiana viajaba por muchos países, pero para ese momento era menor de edad, y al ser interrogado expresamente sobre ello por el despacho no ofreció respuesta coherente alguna, pues tampoco conocía con certeza el establecimiento educativo en el cual, se formaba la menor, pese a invocar convivir con ella.
- Insiste que la convivencia se dio desde el año 1998.

Igualmente se escucharon los testimonios de:

María Eugenia Rendón Ruiz. Expresó que es la prima del demandante. No recuerda el nombre de la pensionada que dice convivió con su familiar. Explicó que la conoció porque una vez los visitó. No recuerda el año cuando la conoció,

ni la edad que la pensionada tenía, solo que tenía una hija cuyo nombre no recuerda, En total la vio 5 veces, supo que estaba enferma, no fue allegada a ella, no asistió a las exequias. Fue una vez a la casa de la pensionada, pero no supo quienes vivían con ella. No sabe cuándo murió. No sabe cómo se conoció la pareja. Solo sabe las cosas de la pareja por lo que le cuenta la mamá de Germán.

José Mauricio Restrepo. DíazCasado con una hermana del demandante, conoció a la señora Aminta porque llegó a la vereda con un esposo que no recuerda y con una hija. Aminta se separó en la época de 1990 y desde el año 1998 vivió con Germán, lo sabe porque se conocieron en una fiesta de amor y amistad. Ellos salieron poquito tiempo 1 año y se fueron a vivir juntos después. Dice haberlos visitado en el año 2005. No recuerda más fechas ni años. No asistió a las exequias, no sabe donde murió, no la visitó en el hospital, no sabe quién le pagaba pensión. Dice que Germán era quien cuidaba a Bibiana.

Dichos testigos, fueron tachados en su oportunidad para ello por los apoderados de las accionadas, en atención a la cercanía que tenían con el demandante.

Ahora, los testimonios allegados como elemento de convicción, deben ser revisados de cara a lo establecido en la sentencia SU 129 del año 2021 que, respecto a las reglas para la apreciación de la testimonial, explicó:

“Finalmente, respecto de la forma en que debe valorarse la prueba testimonial, los Códigos de Procedimiento Civil y Procesal del Trabajo establecen dos reglas en particular. (i) Siendo necesario procurar un mínimo de objetividad en el testimonio, la ley impone al juez el deber de interrogar a la persona sobre “la razón de la ciencia de su dicho con explicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que haya ocurrido cada hecho y de la forma como llegó a su conocimiento [...]”¹⁰¹. La respuesta que se dé a esa pregunta también habrá de estudiarse. Por último, (ii) el Código Procesal del Trabajo resalta que, recabados todos los medios de prueba (incluidos los testimonios), el juez debe analizarlos en conjunto y definir si con ellos es posible llegar al convencimiento de los hechos ocurridos. Todo esto

“inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes”

De acuerdo a las explicaciones dadas por el máximo órgano constitucional, no basta con escuchar los dichos, sino, indagar las razones de ello, es decir, de dónde se extrae su conocimiento, para así, delimitar la certeza de lo que se expone, pues más allá de querer beneficiar a la parte que la convoca al proceso, debe reproducir aquellos hechos que presenció con la naturalidad propia de quien invoca aquello que se quedó en su memoria episódica. Ello, importante para precisar, que los aquí deponentes no tuvieron conocimiento directo de la convivencia que se indica en el líbelo gestor, es decir, nada pueden aportar como elemento de prueba, pues narran situaciones que les fueron aleccionadas por terceras personas.

El deponente José Mauricio Restrepo Díaz se contradijo en sus exposiciones pues narró que la pareja se fue a convivir al año de conocerse, es decir en el año 1998, pero que se conoció en el mismo año 1998 y cuando la *a quo* le indagó por su respuesta la cambió, y dijo que la convivencia inició en el año 1999, empero, desconocía situaciones inherentes a la relación de pareja y a la vida en común como los estudios de la menor hija de la pensionada.

Considera entonces la Sala que ningún testigo arroja claridad en el proceso, pues no son responsivos, claros ni precisos en lo que indican.

En lo que respecta a la acreditación del requisito de convivencia, para acceder a la prestación derivada por muerte, la valoración de los medios probatorios debe realizarse de manera armónica, pues es claro que cada uno de los sujetos procesales incorpora al plenario distintos medios de convicción, algunos que se contradicen entre sí, pero esta precisamente en las manos del juzgador extraer aquello que, llena su convencimiento, como la memoria episódica de los declarantes, las razones de sus dichos, la espontaneidad y claridad en sus exposiciones, todo de cara a los documentales de prueba.

Es ahí, cuando inicia la labor del juzgador, que une todos los elementos probatorios, para determinar aquello que brinde un mínimo de convencimiento judicial, que forme una decisión argumentada, claro está, en toda la prueba arrimada al plenario. En atención a eso, el derecho reclamado solo será concedido en la medida en que se demuestre el convencimiento de lo que con fuerza se asevera en el libelo genitor, pues no solo debe indicarse la calidad de compañero permanente y la convivencia efectiva, sino, crear la certeza de ello, de no ser así, de dejar una duda razonable al juzgador, la consecuencia lógica será la negativa de lo petitionado, como lo explicó la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 4060 de 2019:

“Esto, traído al caso en examen, implica que, para obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, el demandante deberá demostrar el cumplimiento del requisito de convivencia exigido por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, como regla de carga probatoria, y el juez concederá la pretensión cuando encuentre acreditada la satisfacción de dicho requisito sin que haya lugar a dudas razonables, como regla de juicio al amparo de lo dispuesto por el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

Corolario de lo anterior, si el demandante no asume la carga que le fija el estándar, o el juez tiene dudas razonables, la consecuencia procesal será la negación de la pretensión, en tanto el requisito exigido para su procedencia no se demostró”

Nótese pues, como en el presente proceso, la parte actora no cumple siquiera con aportar algún elemento de prueba que cree convicción judicial de los fundamentos fácticos en los que funda su pretensión, pues la incoherencia de uno y otro, hacen que no sea posible su ilación, y por el contrario arrojan el convencimiento judicial de la inexistencia de la convivencia con la finada pensionada, pues la incongruencia enunciada en el hecho primero de la demanda hubiere sido superable, de arrimar la prueba suficiente para acreditar la convivencia por lo menos desde el año 2004, hasta el fallecimiento, situación, que se insiste, no se dio.

Habr , por tanto, de confirmarse, la sentencia objeto de consulta.

Sin costas en esta instancia.

En m rito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISI N LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELL N**, administrando justicia en nombre de la Rep blica de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Confirmar  ntegramente la sentencia proferida el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medell n.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica en **EDICTO**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristiz bal G mez

John Jairo Acosta P rez

Francisco Arango Torres

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ae11ca5b0f0133fd7add14d613f3e6e07ed1fd1f0a911cfd726e2e0bd30470c3**

Documento generado en 17/08/2023 02:32:44 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>